



CONSEJERÍA DE FAMILIA,
JUVENTUD Y ASUNTOS SOCIALES

Este documento se ha obtenido directamente del original que contenía todas las firmas auténticas y se han ocultado los datos personales protegidos y los códigos que permitirían acceder al original

ORDEN

NÚMERO **2880/2025**

CONSEJERÍA DE FAMILIA, JUVENTUD Y ASUNTOS SOCIALES

UNIDAD ADMINISTRATIVA:

Expte.: **062/2026**

DIVISIÓN DE CONTRATACIÓN

En uso de las atribuciones que me han sido conferidas por las disposiciones vigentes

En virtud de lo que establece el artículo 116 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014

DISPONGO

Acordar el inicio y tramitación del expediente correspondiente al contrato de servicios denominado **“PROGRAMA DE INSERCIÓN SOCIOLABORAL PARA JOVENES DE 18 A 21 AÑOS EN GRAVE RIESGO DE EXCLUSIÓN SOCIAL PROCEDENTES DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID COFINANCIADO AL 40% POR EL FONDO SOCIAL EUROPEO PLUS, EN EL MARCO DEL PROGRAMA OPERATIVO DE LA COMUNIDAD DE MADRID (2021-2027)”**, a propuesta de la Dirección General de Infancia, Familia y Fomento de la Natalidad, cuya adjudicación se efectuará mediante tramitación ordinaria por procedimiento abierto y pluralidad de criterios, al amparo de lo previsto en los artículos 131 y 146.2 de la mencionada Ley 9/2027, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, justificando su necesidad en los siguientes motivos.

La Comunidad de Madrid, en virtud del artículo 26.1.24 de su Estatuto de Autonomía, aprobado por Ley Orgánica 3/1983, de 25 de febrero, tiene atribuida competencia exclusiva en materia de protección y tutela de menores y desarrollo de políticas de promoción integral de la juventud. En particular, corresponde a la Dirección General de Infancia, Familia y Fomento de la Natalidad (en adelante, DGIFFN), de la Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales, entre otras funciones, el impulso de las políticas de protección al menor y a la familia, así como la promoción de recursos y actuaciones dirigidos a la consecución del bienestar social de la infancia y la adolescencia y el impulso de la investigación para un mejor conocimiento de la situación y problemas de la infancia, la adolescencia y la familia en la Comunidad de Madrid, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 7 del Decreto 241/2023, de 20 de septiembre, del Consejo de Gobierno, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales (BOCM nº 225, de 21 de septiembre), modificado por el Decreto 107/2024, de 4 de diciembre, del Consejo de Gobierno.

La experiencia de la Comunidad de Madrid con los jóvenes protegidos pone de manifiesto que, al alcanzar la mayoría de edad y cesar, en consecuencia, la acción jurídica protectora, han de hacer un tránsito a la vida adulta, acelerado y comprimido, agravado por las circunstancias familiares y sociales que dieron lugar a la medida de protección. El tránsito a la vida adulta se convierte así en un proceso de alto riesgo, y el joven resulta sin duda especialmente “vulnerable”, por doble partida, por escasez de recursos personales, y por la inexistencia, o presencia limitada de un entorno social y familiar que ofrezca los apoyos necesarios, agravado, en muchos casos, por la dificultad añadida de contar con un techo bajo el que cobijarse tras su salida del centro de acogimiento residencial.

Cada año, en torno a 500 chicos y chicas salen de los centros de protección de la Comunidad de Madrid al cumplir los 18 años. Sin embargo, muchos deben hacerlo sin los soportes sociales y familiares, cuya carencia aconsejó en su momento la adopción de medidas de protección y su mantenimiento hasta la mayoría de edad. Estos jóvenes continúan necesitando un apoyo básico que les permita completar su desarrollo personal y su tránsito a la vida autónoma, que culmine el esfuerzo desarrollado en el seno del sistema de protección.

Mediante el presente contrato se pretende dar respuesta al mandato del artículo 22 bis de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de marzo, de Protección Jurídica del Menor, que **establece que las Entidades Públicas habrán de ofrecer programas de preparación para la vida independiente para jóvenes bajo medida**

de protección, particularmente en acogimiento residencial o en situación de especial vulnerabilidad, desde dos años antes de su mayoría de edad, y una vez cumplida ésta, siempre que lo necesiten, para seguimiento socioeducativo, alojamiento, inserción socio-laboral, apoyo psicológico y ayudas económicas.

En el ámbito autonómico, la Ley 4/2023, de 22 de marzo, de Derechos, Garantías y Protección Integral de la Infancia y Adolescencia de la Comunidad de Madrid determina como uno de sus objetos la regulación de la colaboración con las entidades del tercer sector de acción social (artículo 2.d), configurándose como uno de los principios rectores de la actuación administrativa en este ámbito el establecimiento de actuaciones de carácter integral, transversal y universal, posibilitando espacios de colaboración administrativa en tal sentido. El Capítulo V del Título II de la Ley, bajo el epígrafe “*De la promoción de la iniciativa social para la protección de la infancia y la adolescencia*”, establece que la Comunidad de Madrid, en el ámbito de sus competencias, fomentará el desarrollo de la iniciativa social en actividades relacionadas con la protección y promoción de los derechos de la infancia y la adolescencia, pudiendo llevar a cabo para ello, entre otras funciones, el fomento de iniciativas que contribuyan a proteger de la violencia a los menores y a salvaguardar los derechos de la infancia y adolescencia, pudiendo para ello establecer convenios de colaboración y conciertos con las mencionadas entidades (artículo 60). En el artículo 61 de esta Ley se indica, asimismo, que en colaboración con la sociedad civil y la iniciativa privada, las Administraciones adoptarán planes y programas relativos a aquellas cuestiones que pueden afectar a los niños y, en particular, la evitación de conductas que supongan cualquier forma de violencia contra los niños, la elaboración y suscripción de mecanismos de garantía de entornos seguros para los niños en toda institución o entidad cuyo objeto social esté relacionado con la infancia y la adolescencia.

Por su parte, en dicha Ley autonómica, en su Capítulo VIII del Título III relativo al sistema de protección a la infancia, denominado “*Apoyo a la salida del sistema de protección*”, establece el derecho de los jóvenes a participar en un programa de preparación para la vida independiente, estableciendo en el segundo apartado del apartado quinto del artículo 123 que la Comunidad de Madrid promoverá la colaboración con entidades del tercer sector de acción social que puedan ofrecer acompañamiento personalizado y continuado y proporcionar figuras estables de referencia en el tránsito a la vida adulta.

Para dar respuesta a esta necesidad social y cumplimiento al mandato normativo, la Comunidad de Madrid implementó el Plan de Autonomía Personal 16-21, destinado a procurar itinerarios que permitan compensar los déficits y mitigar los riesgos de la emancipación precoz y acelerada de estos jóvenes. Este Plan cuenta con dos programas, el Programa de Autonomía Personal 16-18 y el **Programa de Tránsito a la Vida adulta 18-21**. Éste último contempla ampliar el acompañamiento y seguimiento de los jóvenes del sistema de protección, hasta al menos los 21 años, para que cuenten con los recursos sociales necesarios que prevengan el riesgo de exclusión social.

En cuanto al **Programa de Inserción Socio-Laboral**, es obvio que para hacer posible este tránsito a la vida adulta en condiciones que les permitan continuar con su proceso de maduración e integración social, estos jóvenes han de tener la oportunidad de completar un itinerario básico que les dote de las dos herramientas fundamentales para un adecuado ajuste psicosocial:

FORMACIÓN Y EMPLEO

La Ley 6/1995, de 28 de marzo, de garantías de los derechos de la infancia y la adolescencia de la Comunidad de Madrid, por su parte, en su artículo 3, sobre los principios de actuación a los que debe responder la actuación de la administración, enuncia entre otros, el de promover la participación de la iniciativa social en relación con la atención y promoción de la infancia y la adolescencia, procurando su incorporación a los planes y programas de atención impulsados por las Administraciones Públicas.

En el artículo 26 de la Ley 4/2023, de 22 de marzo, de Derechos, Garantías y Protección Integral de la Infancia y la Adolescencia de la Comunidad de Madrid establece los derechos en materia de empleo, en el que insta a la Comunidad de Madrid a promover acciones formativas favorecedoras de la inserción socio laboral de los adolescentes a partir de 16 años, mediante programas de formación y capacitación dirigidos específicamente a ellos. En su apartado tercero establece que la Comunidad de Madrid adoptará políticas públicas que faciliten el acceso de los jóvenes al mercado de trabajo, para lo cual las Consejerías competentes en materia de empleo, infancia y adolescencia, y juventud elaborarán un plan de emancipación y acceso al mundo laboral de los jóvenes. Este plan incluirá medidas que faciliten su acceso a un empleo digno y los apoyos necesarios para su desempeño autónomo, y tendrá en cuenta las especiales circunstancias de quienes pertenezcan a determinados colectivos, como el de los jóvenes extutelados.

Desde junio de 2016 se pusieron en marcha varios convenios de colaboración para el alojamiento y acompañamiento educativo de jóvenes extutelados, entre 18 y 21 años y un convenio de inserción sociolaboral con la Fundación ISOS, que posteriormente volvió a firmarse el día 27 de diciembre de 2019 para continuar una línea de colaboración que redundase en beneficio de los objetivos que se pretenden alcanzar con el Plan de Autonomía Personal 16-21: Programa de Inserción Socio-Laboral para jóvenes en riesgo de exclusión social procedentes del Sistema de Protección de la Comunidad de Madrid y que diera cumplimiento a la normativa autonómica y estatal en esta materia.

En la actualidad, este programa dispone de 167 plazas que gestionan diferentes entidades bajo un Acuerdo Marco con la Consejería de Familia, Juventud y Políticas Sociales a través de la Dirección General de Servicios Sociales e Integración.

Una característica fundamental del Programa de Inserción Socio-Laboral para jóvenes en riesgo de exclusión social procedentes del Sistema de Protección de la Comunidad de Madrid es el **carácter individualizado de la intervención para adaptarla a las necesidades especiales de los jóvenes extutelados**.

El trabajo en red y los procedimientos de coordinación y colaboración con todos los agentes implicados son también importantes, por lo que esta licitación es una oportunidad para movilizar las mejores prácticas para favorecer la transición a un proyecto de vida autónoma y prevenir el riesgo de exclusión social.

Asimismo, el Programa desarrolla acciones y metodología específicas para jóvenes con diversidad funcional u otras situaciones de discriminación, que vulneren sus derechos, para incluirlos como participantes del programa, evaluando sus situaciones para adaptar las respuestas a sus necesidades de integración socio-laboral.

De acuerdo con los datos cerrados a 31 de diciembre de 2024, en el recurso se ha atendido a un total de 705 participantes, alcanzando un 87 % el número de participantes extranjeros y dentro de la población extranjera, resalta el colectivo de participantes de origen marroquí, con el 41% del total.

Este programa se desarrolla a través de las siguientes áreas de intervención:

- a. **Información y orientación a los jóvenes.**
- b. **Actuaciones dirigidas a las empresas** (Captación de ofertas de trabajo; contactos directos con empresas y creación de cartera de clientes del ámbito empresarial y búsqueda de empresas que ofrezcan proporcionar experiencias vocacionales a los adolescentes y jóvenes usuarios del proyecto).
- c. **Apoyo y cobertura de necesidades básicas** (proporcionar ayuda económica para alojamiento, transporte y manutención, con objeto de dar respuesta a las situaciones de urgencia sobrevenidas, estableciendo un seguimiento de su evolución).

El hecho de que al Programa lleguen participantes con una situación documental, que les permite residir en nuestro país, pero no trabajar, ha llevado al Programa a trabajar procesos de sensibilización social con el entramado empresarial con el propósito de conseguir como objetivo final, que las empresas puedan apoyar procesos de regularización, permitiendo plantear la modificación de un permiso de residencia no lucrativa a residencia y trabajo mediante una oferta de empleo y así reforzar el itinerario encaminado a la autonomía, mediante su inserción laboral.

De esta manera, desde el Programa de Inserción Socio-laboral para jóvenes de 18 a 21 años se realiza una acción continua de información, orientación, acompañamiento y asesoramiento en dicho ámbito.

La evaluación de los datos del Programa de Inserción Socio-laboral para jóvenes de 18 a 21 años en grave riesgo de exclusión social procedentes del Sistema de Protección de la Comunidad de Madrid, refleja la necesidad de seguir contando con un programa específico de estas características, de carácter transversal, trabajo en red y procedimientos basados en la coordinación entre los protagonistas del proceso de inserción, esto es, los jóvenes extutelados, los profesionales de los pisos donde residen, los empresarios que les oferten empleo y los profesionales del Programa, así como todos aquellos servicios, programas e instituciones involucrados en los itinerarios.

Como se ha comentado anteriormente, un porcentaje alto de los jóvenes en riesgo de exclusión social son de procedencia extranjera, por lo que una mayor inserción e integración socio-laboral de estos jóvenes es

una inversión a largo plazo y un retorno social para la Administración, que va a incorporar al sistema a más jóvenes que coticen para consolidar la solidaridad intergeneracional y va a evitar problemas de delincuencia, desamparo y situación de calle.

Por todo lo anterior, de conformidad con lo establecido en el artículo 28 de la LCSP, se propone la tramitación de un contrato para el desarrollo del programa de inserción socio-laboral para jóvenes de 18 a 21 años en grave riesgo de exclusión social procedentes del sistema de protección de la Comunidad de Madrid.

Este programa va a ser cofinanciado por Fondo Social Europeo, dentro del programa operativo FSE+ de la Comunidad de Madrid (2021-2027), porcentaje de cofinanciación 40% encuadrado en la Prioridad de Empleo Juvenil y en el objetivo específico I) según recoge el art 4.1 del Reglamento (UE) 2021/1057 de 24 de junio, por el que se establece el Fondo Social Europeo Plus (FSE+)

I) Promover la integración social de las personas en riesgo de pobreza o exclusión social, incluidas las personas más desfavorecidas y la pobreza infantil.

La elección de este objetivo específico se justifica en que la actuación se dirige a lograr la mayor empleabilidad de los jóvenes extutelados para conseguir su integración sociolaboral y la creación de una red dinámica y activa que permita compensar las desventajas ante las que se enfrenta este colectivo en su proceso de transición a la vida adulta.

El presente contrato cumple, por tanto, los criterios de selección ligados a los objetivos generales asociados a este Objetivo que van dirigidos a:

- Promover la inclusión social.
- Luchar contra la pobreza y la discriminación.
- Promover la igualdad de oportunidades de acceso al empleo, así como la participación activa y la mejora de la posibilidad de encontrar empleo, mediante la promoción de, condiciones de trabajo justas, fomento del emprendimiento y mejora de la empleabilidad.

Asimismo, se cumplen los criterios de carácter transversal que se incorporan a este Objetivo Temático a través de los que se persiguen unos objetivos generales que conllevan la obligatoriedad de su cumplimiento, ya que en su mayoría forman parte de los principios de actuación que guían el conjunto de la actividad realizada

Con el objeto del presente contrato se están cumpliendo los principios que rigen la contratación pública, fundamentalmente, los principios de igualdad y no discriminación, transparencia, publicidad y libre concurrencia.

De conformidad con lo establecido en el artículo 28 de la LCSP, se propone la tramitación de este contrato por procedimiento abierto.

Madrid, a fecha de firma	<p>LA CONSEJERA DE FAMILIA, JUVENTUD Y ASUNTOS SOCIALES (P.D. Orden 3147/2023, de 5 de diciembre, BOCM nº 304, de 22/12/2023)</p> <p>LA DIRECTORA GENERAL DE INFANCIA, FAMILIA Y FOMENTO DE LA NATALIDAD, (P.D. RESOLUCIÓN 2818/2025, LA SUBDIRECTORA GENERAL DE PROTECCIÓN A LA INFANCIA)</p> <p>Firmado digitalmente por: GÓMEZ APARICIO ANA CRISTINA Fecha: 2025.09.12 13:08</p> <p>Fdo: ANA CRISTINA GÓMEZ APARICIO.</p>
-----------------------------	--